



REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

77ª REUNIÓN — 5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA — 20 DE ABRIL DE 1994

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor **EDUARDO MENEM**,

del señor vicepresidente del Honorable Senado,  
don **ORALDO N. BRITOS**

y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,  
doctor **CONRADO H. STORANI**

Secretarios: doctor **EDGARDO RENÉ PIUZZI** y señor **EDGARDO P. V. MURGUÍA**

Prosecretarios: señor **JUAN JOSÉ CANALS** y doctor **DONALDO ANTONIO DIB**

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
ALASINO, Augusto  
AVELÍN, Alfredo  
BITTEL, Deolindo F.  
BORDÓN, José O.  
BRANDA, Ricardo A.  
BRAVO, Leopoldo  
BRITOS, Oraldo N.  
CABANA, Fernando V.  
CAFIERO, Antonio F.  
CENDOYA, Jorge J.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA RÚA, Fernando  
FADEL, Mario N.  
GENOUD, José  
HUMADA, Julio C.  
JUÁREZ, Carlos A.  
LEÓN, Luis A.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MARTÍNEZ, Daniel E.  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MASSAT, Jorge  
MAZZUCCO, Faustino M.

MENEM, Eduardo  
MIRANDA, Julio  
MOLINA, Pedro E.  
OTERO, Edison  
PEÑA de LÓPEZ, Ana  
RIVAS, Olijela del Valle  
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.  
ROMERO FERIS, José A.  
RUBEO, Luis  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAC, Felipe R.  
SNOPEK, Guillermo E.  
SOLANA, Jorge D.  
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito  
STORANI, Conrado H.  
VACA, Eduardo P.  
VILLARROEL, Pedro G.

### AUSENTES. CON AVISO:

FIGUEROA, José O.  
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.  
OYARZÚN, Juan Carlos  
ROMÉRO, Juan Carlos  
SÁNCHEZ, Libardo N.  
VERNA, Carlos Alberto

**mara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.** (P.E.-559/93.) Se aprueba. (Página 6380.)

19. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación de la doctora Patricia Susana Zabolinsky como jueza nacional de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en Asuntos de Familia y Capacidad de las Personas de la Capital Federal.** (P.E.-591/93.) Se aprueba. (Pág. 6380.)
20. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación de la doctora María Isabel Zapatero de Ruekauf como jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.** (P.E.-583/93.) Se aprueba. (Pág. 6381.)
21. **A moción del señor senador Bittel se considera sobre tablas y se aprueba el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Rubén Omar Caro como juez Federal de Primera Instancia de Zapala, Neuquén.** (P.E.-783/93.) (Pág. 6381.)
22. **Moción de reconsideración formulada por el señor senador Alasino por la que solicita se revea y considere sobre tablas el proyecto de ley en revisión sobre suspensión del proceso a prueba y modificación del Código Penal que figura en el punto 6 de este sumario. Se rechaza.** (Pág. 6384.)
23. **Moción de preferencia formulada por el señor senador Alasino para considerar en la próxima sesión el proyecto de ley en revisión sobre suspensión del proceso a prueba y modificación al Código Penal en lo que respecta a la condena condicional.** (C.D.-22/93.) Se aprueba. (Pág. 6385.)
24. **Por indicación de la Presidencia se pasa a cuarto intermedio a fin de constituir el Cuerpo en Tribunal de Juicio Político.** (Pág. 6386.)
25. **Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Obras Públicas, de Asuntos Administrativos y Municipales y de la Inversión en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas en el ámbito de la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.** (C.D.-25/93.) Se aprueba. (Página 6386.)
26. **Consideración del dictamen, en mayoría y minoría, de las comisiones de Interior y Justicia, de Legislación General y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece una disminución del costo de los procesos judiciales. Se levanta la sesión por falta de quórum.** (Pág. 6395.)

## 27. Apéndice:

### I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 6410.)

— En Buenos Aires, a las 17 y 18 del miércoles 20 de abril de 1994:

**Sr. Presidente (Menem).** — La sesión está abierta.

## 1

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente (Menem).** — Invito al señor senador por Santa Cruz doctor Pedro E. Molina a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.

— Puestos de pie los presentes, el señor senador Molina procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

## 2

### HOMENAJES

## I

**Sr. Presidente (Menem).** — De acuerdo con lo convenido en la reunión de presidentes de bloque, corresponde rendir homenaje al doctor Raúl Matera y al doctor Crisólogo Larralde.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Molina.** — En la reunión de presidentes de bloque se convino que quienes rindan estos homenajes lo hagan en nombre de la Cámara.

Entiendo que el bloque radical designará a un orador para el homenaje al doctor Larralde, así como el nuestro hará lo propio para el que se rendirá al doctor Matera.

Acordamos proceder de esta manera — sin perjuicio de que algún otro señor senador quiera expresar su adhesión — con el objeto de evitar la prolongación de tales homenajes.

**Sr. Presidente (Menem).** — Para rendir homenaje al doctor Raúl Matera tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente, señores senadores: rendir homenaje a Raúl Matera es referirse a un grande de la política de nuestro tiempo porque él reunió en su persona características poco comunes que lo hacen acreedor a esta calificación.

Digo esto porque Matera fue uno de esos hombres que muestran a lo largo de toda su trayectoria una profunda vocación de servicio.

**Sr. Presidente** (Britos). — Se va a votar el artículo 12 con las modificaciones acordadas por las comisiones.

- La votación resulta afirmativa.
- Se enuncian y aprueban los artículos 13 a 18.
- El artículo 19 es de forma.

**Sr. Presidente** (Britos). — Queda sancionado el proyecto de ley<sup>1</sup>. Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.

## 26

### DISMINUCION DEL COSTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES

**Sr. Presidente** (Britos). — Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Interior y Justicia, de Legislación General y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, en mayoría y en minoría, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece una disminución del costo de los procesos judiciales. (Orden del Día N° 1.100 y anexo.)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario** (Piuze). — (Lee)

#### Dictamen de comisión en mayoría

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Interior y Justicia, en mayoría, de Legislación General y de Asuntos Penales y Carcelarios, en mayoría, han considerado el mensaje 2.074/93 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo 360/93, estableciendo una disminución general del costo de los procesos judiciales, en lo que respecta a las retribuciones de letrados y auxiliares de justicia; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1° — Incorpórase al artículo 505 del Código Civil los siguientes párrafos:

Si en incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superarán dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del

porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá exclusivamente en litigios cuyo monto, legalmente determinado, excediere la suma de dos millones de pesos (\$2.000.000), en la cantidad que sobrepasare dicho límite.

Art. 2° — Incorpórase al artículo 521 del Código Civil el siguiente párrafo:

En este caso, no será aplicable el tope porcentual previsto de los dos últimos párrafos del artículo 505.

Art. 3° — Incorpórase al artículo 1.627 del Código Civil el siguiente párrafo:

Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales. Cuando el precio por los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio. Los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales. Si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida.

Art. 4° — Sustitúyese el segundo párrafo del inciso 1° del artículo 277 de la ley 19.551 (texto ordenado 1984), por el siguiente texto:

La Sindicatura es ejercida por contadores públicos diplomados y abogados; en ambos casos, con más de cinco años de ejercicio profesional.

Art. 5° — Incorpórase al artículo 281 de la ley 19.551 (texto ordenado 1984), el siguiente párrafo:

Idéntico tratamiento tendrá el síndico designado si fuera abogado y requiriera el concurso de un contador público diplomado. De ser abogado el síndico, serán a su cargo exclusivo, los honorarios que pudieran devengarse a favor de otros abogados que lo asistieren en su gestión, salvo la hipótesis prevista en el artículo 282 in fine de la presente ley.

Art. 6° — Incorpórase al primer párrafo del artículo 283 de la ley 19.551 (texto ordenado 1984), el siguiente texto:

También podrá recaer la designación en contadores públicos diplomados y abogados de la matrícula, especializados o idóneos.

Art. 7° — Incorpórase como artículo 309 bis de la ley 19.551 (t.o. 1984), el siguiente texto:

En los procesos de revisión de verificaciones de créditos y en los de verificación tardía, se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

Art. 8º — Incorpórase al artículo 277 de la ley 20.744 (t.o. 1976), el siguiente párrafo:

La responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados o correspondientes a la primera o única instancia, no excederán del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

Art. 9º — Incorpórase como último párrafo del artículo 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:

Los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los honorarios que le fueran regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 478.

Art. 10. — Incorpórase como primer párrafo del artículo 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:

Los jueces deberán regular los honorarios de los peritos y demás auxiliares de la justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos.

Art. 11. — Declárase aplicable lo dispuesto en los artículos 77 y 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con las modificaciones introducidas por la presente ley, al procedimiento ante el fuero del trabajo instituido por la ley 18.345.

Art. 12. — Modifícase la ley 21.839 en las partes que a continuación se indican:

a) Sustitúyese el artículo 2º por el siguiente:

Los profesionales que actúen para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia, no están comprendidos en la presente ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a cargo de otra de las partes intervinientes en el proceso.

b) Sustitúyese el artículo 3º por el siguiente:

La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso en la medida de su oficiosidad, salvo en los casos en que conforme a excepciones legales pudieran o debieran actuar gratuitamente.

Se presume gratuito el patrocinio o representación de los ascendientes, descendientes o cónyuge del profesional.

Las disposiciones de la presente ley se aplicarán supletoriamente a falta de acuerdo expreso en contrario.

c) Derógase el artículo 5º.

d) Sustitúyese el inciso c) del artículo 6º por el siguiente:

El resultado que se hubiere obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada en el juicio por el vencido.

e) Sustitúyese el artículo 8º por el siguiente:

Salvo pacto en contrario, los honorarios de los abogados no podrán ser regulados en sumas inferiores a quinientos pesos (\$ 500) en los procesos de conocimiento, trescientos pesos (\$ 300) en los procesos de ejecución y doscientos pesos (\$ 200) en los procesos voluntarios. Cuando se tratare de procesos correccionales, los honorarios mínimos serán de quinientos pesos (\$ 500), y en los demás procesos penales serán de un mil pesos (\$ 1.000).

Las regulaciones mínimas previstas deberán adecuarse, en su caso, a lo dispuesto en el artículo 10 y en el capítulo III de la presente ley.

f) Sustitúyese el artículo 9º por el siguiente:

Los honorarios de los procuradores serán fijados entre un treinta por ciento (30 %) y un cuarenta por ciento (40 %) de lo que le correspondiere a los abogados.

Cuando los abogados también actuaren como procuradores, percibirán los honorarios que correspondiere fijar si actuaren por separado abogados y procuradores.

g) Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

Cuando el honorario debiere regularse sin que se hubiere dictado sentencia ni sobrevenido transacción, se considerará monto del proceso la suma que, razonablemente, y por resolución fundada, hubiera correspondido a criterio del tribunal, en caso de haber prosperado el reclamo del pretensor. Dicho monto no podrá ser en ningún caso superior a la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvenición, cuando ésta se hubiere deducido.

h) Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:

En los procesos por expropiación, el monto será el de la diferencia que existiere entre el importe depositado en oportunidad de la desposesión y el valor de la indemnización que fijare la sentencia o se acordare en la transacción, comparados en valores constantes.

i) Sustitúyese el artículo 29 por el siguiente:

En los procesos por retrocesión, el monto será la diferencia entre el valor del bien al tiempo de la sentencia que hiciera lugar a aquélla y el importe de la indemnización que hubiere percibido el expropiado o, en su caso, el de la transacción todos ellos comparados en valores constantes.

j) Sustitúyese el último párrafo del artículo 30 por el siguiente:

En los divorcios por presentación conjunta de los cónyuges, los honorarios mínimos serán de quinientos pesos (\$500) para el patrocinante de cada cónyuge, salvo pacto por monto inferior.

k) Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente:

En los incidentes, el honorario se regulará entre el dos por ciento (2%) y el veinte por ciento (20%) de lo que correspondiere al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudiera tener con la solución definitiva del proceso principal, no pudiendo el honorario, salvo pacto en contrario, ser inferior a la suma de cincuenta pesos (\$50).

l) Sustitúyese el artículo 36 por el siguiente:

En los procesos por hábeas corpus, amparo y extradición, el honorario no podrá ser inferior a la suma de quinientos pesos (\$500) salvo pacto en contrario.

m) Sustitúyese el artículo 53 por el siguiente:

Los importes de las multas constituirán recursos específicos del Poder Judicial de la Nación de conformidad a lo previsto en el artículo 3° de la ley 23.853.

n) Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 56 por el siguiente:

Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse la clausura del local a simple requerimiento de las asociaciones profesionales de abogados y procuradores, o de oficio, y una multa de mil pesos (\$1.000) solidariamente a los infractores.

ñ) Sustitúyese el primer párrafo del artículo 58 por el siguiente:

Los honorarios de los abogados por su labor extrajudicial, podrán convenirse con el cliente, pudiendo observarse las siguientes pautas.

o) Sustitúyense los montos señalados en el artículo 58 por los siguientes:

En el inciso a): veinte pesos (\$20).

En el inciso b): cincuenta pesos (\$50).

En el inciso c): sesenta pesos (\$60).

En el inciso d): quinientos pesos (\$500).

En el inciso e): cien pesos (\$100).

En el inciso f): doce mil quinientos pesos (\$12.500).

En el inciso f'): de doce mil quinientos un peso (\$12.501) a setenta y cinco mil pesos (\$75.000).

En el inciso f''): setenta y cinco mil un pesos (\$75.001).

En el inciso g): trescientos pesos (\$300).

p) Derógase el artículo 60.

q) Sustitúyese el artículo 61 por el siguiente:

Las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del

deudor, serán actualizadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Convertibilidad 23.928, de acuerdo con el índice de precios al por mayor, nivel general, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las sumas actualizadas devengarán un interés del seis por ciento (6%) anual, a partir de la fecha antes indicada, esas deudas devengarán intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina.

Art. 13. — Los jueces deberán regular honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la justicia, por la labor desarrollada en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder. En tales casos, la resolución que así lo determine deberá indicar, bajo sanción de nulidad, el fundamento explícito y circunstanciado de las razones que justificaren la decisión.

Déjanse sin efecto todas las normas arancelarias que rijan la actividad de los profesionales o expertos que actúen como auxiliares de la justicia, por labores desarrolladas en procesos judiciales o arbitrales, en cuanto se opongan a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 14. — Los profesionales o expertos de cualquier actividad podrán pactar con sus clientes la retribución de sus honorarios, sin sujeción a las escalas contenidas en las correspondientes normas arancelarias. En caso de que tales honorarios deban ser abonados por labores desarrolladas en procesos judiciales o arbitrales, quedará a salvo el derecho de los profesionales de percibir honorarios a cargo de otra parte condenada en costas.

Art. 15. — Lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la presente ley es complementario del Código Civil.

Art. 16. — Invítase a las provincias a adherir al presente régimen, en lo que fuera pertinente.

Art. 17. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad al artículo 118 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 23 de febrero de 1994.

*Juan R. Aguirre Lanari. — Augusto Alasino. — Jorge D. Solana. — Carlos A. Juárez. — Guillermo E. Snopek. — Eduardo P. Vaca. — Julio A. Miranda. — José O. Figueroa. — Julio A. San Millán.*

## ANTECEDENTE

### Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

Buenos Aires, 8 de octubre de 1993.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto

llamado a propender a una disminución general de los procesos judiciales, moderando prudentemente los niveles de retribuciones tanto de los letrados como de los restantes auxiliares de la justicia.

Constituye motivo de especial preocupación para el Poder Ejecutivo nacional, promover un mejoramiento general del servicio de justicia asegurando un amplio acceso al mismo a todos los sectores de la población, que con frecuencia ven dificultado el ejercicio de sus derechos debido a la onerosidad de los honorarios profesionales y demás gastos causídicos, situación que se torna crítica fundamentalmente para los niveles de menores recursos económicos.

En tal sentido, debe tenerse presente, que la experiencia ha demostrado la insuficiencia práctica del beneficio procesal de litigar sin gastos, previsto por los códigos adjetivos para facilitar la utilización del servicio de justicia a quienes carecen de los medios para sufragar sus costos.

En otro orden de ideas, el dinámico proceso de reorganización de la economía que tan exitosamente ha encarado nuestro país, ha demandado la introducción de profundos cambios basados en principios de desregulación y flexibilización que han contribuido eficazmente a la estabilización y al crecimiento económico registrado en los últimos años. Una condición sustancial para asegurar la continuidad del proceso en curso es incrementar de manera sostenida el nivel de eficiencia y competitividad del sistema económico en su conjunto, para lo cual resulta indispensable una reducción general de lo que se ha dado en llamar el "costo argentino" y que afecta de manera directa el desempeño del sector productivo.

Finalmente, y ya desde un punto de vista general, se ha venido advirtiendo durante los últimos años un negativo y alarmante crecimiento de los índices de litigiosidad en los distintos fueros judiciales circunstancia que fuera estimulada por la inestabilidad y desorganización que durante un largo período caracterizaran a la economía argentina. Lamentablemente, el Estado argentino —y consiguientemente el patrimonio común— ha debido soportar en toda su magnitud, el deletéreo impacto de este fenómeno.

Estas consideraciones y la necesidad de alcanzar una solución que abarque la totalidad del país, ha llevado a proponer enmiendas al derecho común y a las leyes especiales, sin perjuicio de lo propuesto en punto a reformas de la Ley Procesal.

A este respecto, es necesario recordar que el Sumo Pontífice, en su Encíclica *Dives In Misericordiam* recuerda la necesidad no sólo de la tutela de los derechos sino que aconseja la observancia de la misericordia en el marco secular de la justicia. Recoge por lo demás ideas permanentes enraizadas en la doctrina cristiana tradicional que se vinculan a la noción de justicia social que en todo momento ha constituido el eje moral del accionar de nuestros gobiernos.

El proyecto de ley que se somete a la consideración de vuestra excelencia procura reforzar el acceso al servicio de justicia de la población, mediante la modificación de normas de la ley sustancial, el Código Civil, y de las leyes arancelarias, que facilitan en algunos casos excesos manifiestos en los montos de los honorarios que se regulan a los profesionales intervinientes en los procesos

judiciales sin perjuicio de que podrían ser corregidos por los magistrados.

Con tal objeto se propicia la incorporación al Código Civil de normas que posibilitan la reducción de los honorarios a reconocer por debajo de los mínimos previstos por las normas arancelarias locales, cuando su aplicación conduce a una notoria e injusta desproporción con la labor profesional cumplida, estableciéndose además límites absolutos a la carga de las costas respecto del condenado a pagarlas con relación al monto del juicio.

Se introducen también reformas a los aranceles profesionales, reiterando el principio de libertad de contratación y la facultad de los magistrados de efectuar regulaciones por debajo de los mínimos, en el mismo supuesto que el proyecto introduce en la legislación de fondo, reseañado en el párrafo precedente.

Igualmente se propician modificaciones a las leyes procesales y a la legislación concursal, con el mismo objeto, y la ratificación con fuerza de ley de las normas de los decretos 2.284/91 y 1.813/92 en lo que son objeto de materia legislativa. En idéntico sentido, se introducen modificaciones a la legislación laboral y procesal laboral a fin de morigerar el costo de dicha litigiosidad particularmente con relación a la producción de la prueba.

Las medidas que se propician enmarcan en la política de gobierno de asegurar el funcionamiento transparente de los mercados de servicios, a través de la desregulación y el fomento de la competencia, de modo compatible con la justa retribución del trabajo profesional efectivamente realizado, el acceso popular al servicio de justicia, y la razonable satisfacción de las costas en el proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos.

Este programa de política económica y social redundará en la reducción del costo argentino, el incremento de la eficiencia y la productividad, y el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos.

Para dar la debida amplitud y alcance a la reforma propiciada se ha previsto la incorporación de modificaciones a la legislación de fondo para lo cual se ha tenido fundamentalmente en cuenta disposiciones contenidas en la legislación civil, en cuanto derecho común, de proyección y aplicación a las restantes ramas y especialidades jurídicas. Esto resulta de singular importancia en los supuestos referidos al campo de las obligaciones y de la locación de servicios profesionales. En virtud de ello, las reformas serán de aplicación para todo el país por parte de la justicia federal, nacional y provincial.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CARLOS S. MENEM.

*Domingo F. Cavallo. — Jorge L. Maiorano.*

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Agrégase al artículo 505 del Código Civil el siguiente texto:

Si el incumplimiento de la obligación deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspon-

dientes a la primera o única instancia no excederá del 25 por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que pone fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas, conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

Art. 2° — Agrégase el artículo 521 del Código Civil, el siguiente texto:

En este caso, no será aplicable el tope porcentual previsto en el segundo párrafo del artículo 505.

Art. 3° — Modifícase el artículo 1.627 del Código Civil, agregándole como último párrafo el siguiente:

Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales. Cuando el precio por los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio. Los jueces podrán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujera a una desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida en el proceso, cualquiera fuera el obligado al pago.

Art. 4° — Reemplázase el segundo párrafo del inciso 1° del artículo 277 de la ley 19.551 por el siguiente texto:

La sindicatura es ejercida por contadores públicos diplomados y abogados; en ambos casos con más de diez años de ejercicio profesional.

Art. 5° — Agrégase como párrafo tercero del artículo 281 de la ley 19.551 el siguiente texto:

Idéntico tratamiento tendrá el síndico designado si fuera abogado y requiriera el concurso de un contador público diplomado. De ser abogado el síndico, serán a su cargo exclusivo, los honorarios que pudieran devengarse a favor de otros abogados que colaboren —a cualquier título— con su gestión, salvo la hipótesis prevista en el artículo 282 in fine de la presente ley.

Art. 6° — Agrégase al primer párrafo del artículo 283 de la ley 19.551 el siguiente texto:

También podrá recaer la designación en contadores diplomados y abogados de la matrícula, especializados o idóneos en la administración de los bienes que integran el activo.

Art. 7° — Agrégase como segundo párrafo del artículo 294 de la ley 19.551 el siguiente texto:

Los jueces deberán regular honorarios sin atender a los mínimos fijados en esta ley, cuando la naturaleza, alcance, calidad o resultado de la labor profesional o el valor de los bienes que se consideren indicaren que la aplicación lisa y llana de

aquellos conduce a una desproporción entre la importancia del trabajo realizado y la retribución resultante. En este caso, el pronunciamiento judicial deberá contener fundamento explícito de las razones que justifican esa decisión, bajo pena de nulidad.

Art. 8° — Agrégase como artículo 309 bis de la ley 19.551 el siguiente texto:

En los procesos de revisión de verificaciones de créditos y en los de verificación tardía, se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado.

Art. 9° — Agrégase como último párrafo del artículo 277 de la ley 20.744 el siguiente texto:

La responsabilidad por el pago de las costas devengadas en procesos judiciales o arbitrales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia no excederán del 25 por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que pone fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentual indicado no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

Art. 10. — Se declara aplicable al régimen de la ley 18.345, lo dispuesto por el artículo 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 22.434).

Art. 11. — Agrégase al artículo 84 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 22.434) como último párrafo el siguiente texto:

Los honorarios periciales derivados de un proceso tramitado bajo el presente beneficio, quedarán reducidos al 50 por ciento del monto regulado si la ejecución se dirigiera contra la parte no condenada en costas.

Art. 12. — Modifícase la ley 21.839, en las partes que a continuación se indican:

a) Reemplázase el artículo 2° de la ley 21.839, por el siguiente texto:

Artículo 2°: Los profesionales que actúen para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia no están comprendidos por la presente ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediaré condena en costas a la parte contraria.

b) Reemplázase el artículo 3° de la ley 21.839, por el siguiente:

Artículo 3°: La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso, en la medida de su oficiosidad, excepto en los casos en que conforme a excepciones legales pu-

dieran o debieran actuar gratuitamente. Los profesionales podrán acordar libremente con sus clientes los honorarios que correspondan por la prestación de sus servicios, sin perjuicio de su derecho a percibir los honorarios a que se condene a la contraparte a pagarles. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán supletoriamente ante la falta de acuerdo expreso en contrario.

Se presume gratuito, en cambio, el patrocinio o representación de los ascendientes del profesional o de su cónyuge, y de los descendientes.

c) Derógase el artículo 5º de la ley 21.839.

d) Reemplázase el inciso c) del artículo 61 de la ley 21.839 por el siguiente texto:

El resultado que se hubiere obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada en el juicio por el vencido.

e) Agrégase como párrafo final del artículo 6º de la ley 21.839, el siguiente texto:

Los jueces deberán regular honorarios sin atender a los mínimos fijados en esta ley cuando la naturaleza, alcance, calidad, o resultado de la labor profesional o las características particulares del proceso así lo aconsejaren. En tal caso la sentencia deberá contener el fundamento explícito de las razones que motivaron tal decisión, bajo pena de nulidad.

f) Derógase el artículo 8º de la ley 21.839.

g) Reemplázase el artículo 9º de la ley 21.839, por el siguiente:

Artículo 9º: Los honorarios de los procuradores serán fijados entre un 30% y un 40% de los que le correspondieren al abogado patrocinante interviniente en la causa.

h) Agrégase al final del artículo 19 de la ley 21.839, el siguiente texto:

En los juicios ejecutivos en los que no se hubieren opuesto excepciones, y en las etapas de ejecución de sentencia de los procesos, el monto del juicio a los fines regulatorios se reducirá a lo efectivamente realizado, debiendo los jueces regular los honorarios en un porcentaje de lo que perciban sus poderdantes o patrocinados. En ningún caso el monto del litigio, considerado para regular honorarios será superior al que se tenga en consideración para el cálculo de la tasa judicial.

En los supuestos de ejecución judicial forzosa de la contraparte condenada en costas, el profesional deberá cobrar los honorarios regulados *pari-passu* y a prorrata de lo cobrado por el cliente proveniente de la ejecución de los bienes del deudor.

i) Reemplázase el artículo 20 de la ley 21.839 por el siguiente texto:

Cuando el honorario deba regularse habiéndose rechazado totalmente la demanda o reconvención o sin que se hubiere dictado sentencia ni sobrevenido transacción, se considerará monto del proceso el

que determine el juez de la causa, según las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvención, cuando ésta se hubiere deducido.

j) Reemplázase el artículo 28 de la ley 21.839, por el siguiente:

En los procesos por retrocesión, el monto será la de la diferencia que existiere entre el importe depositado en oportunidad de la desposesión y el valor de la indemnización que fijare la sentencia o se acordare en la transacción, comparados en valores constantes.

k) Reemplázase el artículo 29 de la ley 21.839, por el siguiente:

En los procesos por retrocesión, el monto será la diferencia entre el valor del bien al tiempo de la sentencia que hiciere lugar a aquélla y el importe de la indemnización que hubiere percibido el expropiado, o, en su caso el de la transacción; todos ellos comparados en valores constantes.

l) Derógase el artículo 33 de la ley 21.839 y se lo reemplaza por el siguiente texto:

Artículo 33: En los incidentes, el honorario se regulará entre el 10% y el 20% de los que correspondieren al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudieren tener con la solución definitiva del proceso principal.

ll) Derógase el artículo 36 de la ley 21.839.

m) Reemplázase el artículo 53 de la ley 21.839, por el siguiente:

Artículo 53: Los importes de las multas se acreditarán en una cuenta especial que el Poder Ejecutivo nacional creará con destino a inversiones y gastos para los tribunales federales y nacionales.

n) Derógase el artículo 60 de la ley 21.839.

ñ) Reemplázase el artículo 61 de la ley 21.839, por el siguiente:

Artículo 61: Las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, devengarán intereses a la tasa que determine el juez de la causa.

Art. 13. — Derógase en los cuerpos legales y reglamentarios pertinentes que fijan retribuciones por la actuación de abogados, procuradores, peritos y demás auxiliares de la justicia, las declaraciones de orden público de sus normas. Por consiguiente la retribución de servicios podrá pactarse libremente entre los interesados. Si se tratara de honorarios que retribuyen la labor judicial o arbitral de los aludidos expertos los jueces procederán a fijarla sin tener en cuenta los mínimos establecidos por la respectiva normativa cuando la naturaleza, alcance, calidad o resultados de la labor especial o el valor de los bienes en litigio, así lo aconsejare. En este caso, el pronunciamiento judicial deberá contener fundamentos explícitos de las razones que aconsejan tal decisión, bajo pena de nulidad.



Art. 14. — Agrégase como último párrafo del artículo 4º del decreto ley 3.771/57 (arancel profesional para ingenieros agrónomos) el siguiente texto:

Si se tratara de regulación de honorarios en sede judicial o arbitral, el tribunal deberá retribuir el trabajo profesional por debajo de lo dispuesto en el presente artículo, cuando la naturaleza, alcance, calidad o resultados de la labor profesional o el valor de los bienes en litigio, así lo aconsejare.

Art. 15. — Derógase el artículo 10 del decreto ley 3.771/57 (arancel profesional para ingenieros agrónomos).

Art. 16. — Agrégase al final del artículo del decreto ley 3.771/57 (arancel profesional para ingenieros agrónomos) el siguiente texto:

El presente artículo no regirá en los casos en que el desempeño profesional se realizara en actuaciones judiciales o arbitrales.

Art. 17. — Agrégase al final del artículo 53 del decreto ley 3.771/57 (arancel profesional para ingenieros agrónomos) el siguiente texto:

Los jueces podrán regular los honorarios por debajo de los previstos y en los recaudos indicados en el artículo 16 de la presente ley.

Art. 18. — Derógase el texto final del artículo 2º del decreto ley 16.638/57 (régimen arancelario por profesionales de ciencias económicas) que dice: "será nulo todo acuerdo de voluntades por suma menor".

Art. 19. — Reemplázase el inciso b) del artículo 3º del decreto ley 16.638/57 (régimen arancelario por profesionales de ciencias económicas) por el siguiente texto:

Se considera monto del juicio la cantidad fijada por la sentencia o en la transacción, salvo que el aspecto peritado sea parcial o inferior al monto del juicio, en cuyo caso se estará a este último. Si la demanda fuere rechazada totalmente, la regulación se hará prescindiendo de la escala establecida en este artículo, en base a la calidad, extensión e importancia de los dictámenes presentados y duración de los trabajos realizados.

Art. 20. — Derógase el inciso g) 3º del decreto ley 16.638/57 (régimen arancelario por profesionales de ciencias económicas).

Art. 21. — Derógase el artículo 5º del decreto ley 16.638/57 (régimen arancelario por profesionales de ciencias económicas) y se lo reemplaza por el siguiente:

Los jueces deberán retribuir el trabajo profesional por debajo de los topes indicados en el presente arancel cuando la naturaleza, alcance, calidad o resultado de la labor profesional o el valor de los bienes en litigio, así lo aconsejare.

Art. 22. — Derógase la última parte del artículo 28 de la ley 20.243 (arancel de calígrafos) donde dice: "si no hubiere convenio por una suma mayor".

Art. 23. — Derógase el artículo 35 de la ley 20.243 (arancel de calígrafos) y se lo reemplaza por el siguiente:

Los jueces deberán retribuir el trabajo profesional por debajo de los topes indicados en el pre-

sente arancel cuando la naturaleza, alcance calidad o resultado de la labor profesional o el valor de los bienes en litigio, así lo aconsejare.

Art. 24. — Derógase el segundo párrafo del artículo 39 de la ley 20.243 (arancel de calígrafos).

Art. 25. — Agrégase como párrafo final del artículo 31 de la ley 20.305 (traductores públicos) el siguiente texto:

Los jueces deberán retribuir el trabajo profesional por debajo de los topes indicados en el presente arancel cuando la naturaleza, alcance, calidad o resultado de la labor profesional o el valor de los bienes en litigio, así lo aconsejare.

Art. 26. — Deróganse los artículos 35 y 36 de la ley 20.305 (traductores públicos).

Art. 27. — Agrégase como segundo párrafo del artículo 1º del decreto 1.208/87 (arancel notarial) el siguiente texto:

Si se tratara de labores cumplidas en el marco de un proceso judicial o arbitral los jueces deberán retribuir el trabajo profesional por debajo de los topes indicados en el presente arancel cuando la naturaleza, alcance, calidad o resultado de la labor profesional o el valor de los bienes en litigio, así lo aconsejare.

Art. 28. — La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación respecto de todas las retribuciones profesionales que aún no posean calidad de cosa juzgada.

Art. 29. — Invítase a las provincias a adherir al presente régimen, en lo que fuera pertinente.

Art. 30. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Domingo F. Cavallo. — Jorge L. Maiorano.*

#### Dictamen de comisión en minoría

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Interior y Justicia, de Legislación General y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, en minoría, han considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional (expediente P.E. 360/93), estableciendo una disminución general del costo de los procesos judiciales, en lo que respecta a las retribuciones de letrados y auxiliares de la justicia; y, por las razones expresadas en sus fundamentos, os aconsejan su rechazo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 23 de febrero de 1994.

*Jorge J. Cendoya. — Pedro G. Villarroel.  
— Hipólito Solari Yrigoyen.*

#### FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Señor presidente:

En su mensaje y proyecto de ley de reformas a los aranceles y honorarios profesionales, el Poder Ejecutivo nacional ha señalado el objetivo primordial de pro-

penden a una disminución general del costo de los procesos judiciales.

A la vez ha expresado su especial preocupación de promover por medio de esta iniciativa un mejoramiento del servicio de justicia, asegurando un amplio acceso al mismo a todos los sectores de la población.

Sin embargo, frente a este proyecto de ley, caben plantearse numerosos interrogantes, tanto acerca de su virtualidad para conseguir los objetivos apuntados, como de las serias consecuencias que su sanción puede acarrear para el sostenimiento de una justicia independiente.

La labor de una abogacía libre e independiente, organizada al margen de toda injerencia de los poderes corporativos estatales o de las empresas privadas, es una garantía indispensable que debe sostener toda sociedad civilizada.

Solamente de la mano de abogados libres e independientes el ciudadano accede a la justicia para defender su libertad y su dignidad.

La eliminación de los mínimos obligatorios de las leyes de aranceles profesionales, que aseguran una justa retribución de los abogados, puede conducir a deprecia gravemente la prestación del servicio de justicia.

Se corre el riesgo de desatar una competencia ruinosa, donde la excelencia del servicio profesional será amenazada por las reglas del mercado. De tal manera, el honorario más bajo será ofrecido por el profesional menos apto, perjudicando en definitiva a la comunidad.

Las leyes arancelarias aseguran no solamente la justa retribución del abogado. Constituyen también una garantía de todos los ciudadanos que puedan requerir sus servicios profesionales.

A través de las escalas arancelarias de orden público, que las leyes dictadas en cada una de las distintas jurisdicciones provinciales pueden adecuar según las circunstancias, se garantiza un interés social de quien deba tomar el servicio.

El ciudadano que deba abonar honorarios profesionales podrá atenerse a pautas de equidad y certeza, dentro de las cuales se asegura prudentemente una justa retribución del abogado, no como un valor arbitrario, sino como un valor establecido por ley y al cual los mismos jueces deben someterse para asegurar justicia.

No puede desconocerse la función social que cumplen las leyes de aranceles profesionales. Sin leyes de aranceles los ciudadanos pueden quedar desprotegidos al demandar los servicios en casos de urgencia o necesidad.

Hay una función orientadora en toda ley de aranceles. Antes o fuera de un pleito, sirven para orientar la percepción de emolumentos por un servicio profesional.

De tal manera, se ha reconocido por una inveterada doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia bajo diversas integraciones, que la naturaleza de toda ley de aranceles está ligada indisolublemente al resultado de la verdadera prestación del servicio profesional y a la esencia de la profesión de abogado.

Sin mediar mínimos arancelarios el servicio profesional no se presta, o se presta en forma deficiente. Con ello se impide el acceso a la justicia a los sectores más pobres de la población.

Asimismo las garantías de mínimo remuneratorio que fijan las leyes de aranceles constituyen las bases sobre las cuales se han establecido los sistemas de previsión y seguridad social de los profesionales en las distintas provincias.

La derogación de numerosas leyes provinciales de aranceles profesionales, que propicia el proyecto, no debiera significar un salto al vacío en esta materia, donde hay un evidente interés social comprometido.

En nombre de los principios de desregulación y flexibilización, el proyecto de ley en examen avanza sobre nuestro derecho constitucional avasallando las autonomías de las provincias y la organización federal de nuestro país.

Entre las competencias exclusivas de las provincias reconocidas por la Constitución Nacional caben las de dictar su propia Constitución, establecer impuestos directos, dictar sus leyes procesales, asegurar su régimen municipal y su educación primaria. Se trata de competencias prohibidas al Estado federal, que el Congreso de la Nación debe respetar, conforme la reserva del artículo 104 y la autonomía consagrada por el artículo 105 de nuestra Carta Magna.

También resulta inadmisibles que el proyecto avance sobre nuestra legislación de fondo, como el Código Civil. Mediante una criticable técnica legislativa se pretenden incluir reglas típicas de procedimiento entre las normas del Código Civil sobre las "Obligaciones" (artículo 505 del Código Civil).

Las normas locales sobre aranceles forman parte de la masa de competencias exclusivas de las provincias para dictar sus propios Códigos de Procedimientos.

Las normas de honorarios profesionales son de procedimiento y están reservadas a las provincias según el artículo 104 de la Constitución Nacional.

Así lo dejó establecido Dalmacio Vélez Sarsfield en claras disposiciones del Código Civil, como el artículo 1.952, referido al mandato. Dicha norma resulta por completo ignorada en el proyecto en examen.

Por último, cabe destacar que los jueces pueden siempre limitar las regulaciones de los tribunales inferiores, cuando se hubieren fijado honorarios excesivos, por medio de la aplicación del instituto del abuso de derecho (artículo 1.071 del Código Civil) que mantiene plena vigencia.

Por las razones expuestas se deja fundado el rechazo del proyecto de ley en examen.

*Jorge J. Cendoya. — Pedro G. Villarroel.  
— Hipólito Solari Yrigoyen.*

#### AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

A los fundamentos contenidos en el dictamen en disidencia total de los senadores Hipólito Solari Yrigoyen y Pedro Guillermo Villarroel que comparto en su totalidad, agrego, sin perjuicio de la ampliación que formularemos en el debate, lo siguiente:

En la especie no se trata solamente del allanamiento de las autonomías provinciales en orden a las facultades constitucionales no denegadas, tales como la policía de las profesiones y la facultad de dictar sus propios códigos

de procedimiento, sino también que en el proyecto se contienen retrógradas normas acerca de las incumbencias profesionales, tal como la de confiar a los abogados la sindicatura de los concursos que desde hace más de un siglo es materia propia de los contadores públicos, sino que también se confunde la labor de los que intervienen voluntariamente en las contiendas judiciales, con la de aquellos técnicos que deben intervenir obligatoriamente por razón de su inclusión en la lista de sorteos. Además la técnica de una "ley omnibus" que modifica nada menos que el Código Civil, Código Comercial, la Ley de Quiebras, la Ley de Sociedades, la Ley de Aranceles, revela una improvisación incompatible con la trascendencia de las cuestiones involucradas.

El proyecto debe merecer el rechazo unánime de la Cámara, por ser el Senado expresión del país federal que aquél desconoce.

*Jorge J. Cendoya.*

#### ACLARACION

Los antecedentes no se publican por estar insertos en el Orden del Día N° 1.100.

**Sr. Presidente (Britos).** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: en mi carácter de miembro informante de la mayoría me toca referirme al proyecto de ley sobre honorarios que, como sabemos, se ha originado en una iniciativa del Poder Ejecutivo nacional.

Soy plenamente consciente de la importancia y conflictividad que reviste esta cuestión. Quiero entonces y en forma preliminar destacar que las comisiones encargadas de este proyecto de ley se han abocado a su análisis con total dedicación, sabedores sus integrantes de la trascendencia que el asunto tiene no solamente para los sectores directamente involucrados, sino también para la sociedad en su conjunto ya que, en definitiva, se trata de cumplir el enunciado del Preámbulo de nuestra Constitución en cuanto señala como objetivo específico e irrenunciable el de "afianzar la justicia".

El proyecto presenta ciertos rasgos generales que debo destacar antes de entrar a analizar en detalle su contenido.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador Conrado H. Storani.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Su objetivo principal es el de establecer una disminución general del costo de los procesos judiciales, en lo que se refiere a las retribuciones de los profesionales del derecho y demás auxiliares de la Justicia, es

decir, se tiende a abaratar razonablemente el costo de los honorarios.

Al mismo tiempo, y esto posee igual importancia que el objetivo antes señalado, se consolida la libertad de contratación, dejando sin efecto el carácter de orden público que revisten las escalas arancelarias.

Es cierto que el artículo 8° del decreto 2284/91 ya había eliminado las declaraciones de orden público establecidas en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, pero ahora —como corresponde— se lo hace por ley del Congreso, no por intermedio de un simple decreto del Ejecutivo.

Se modifican ciertos aspectos de la ley de concursos, previendo la posibilidad de que la sindicatura sea ejercida no solamente por contadores públicos sino también por abogados.

Se declaran aplicables los principios y objetivos del proyecto en el ámbito del proceso laboral, a cuyo fin se modifican las normas pertinentes. Esto tiene por finalidad evitar ciertos abusos que muchas veces se cometen en los juicios que tramitan por ante la Justicia del Trabajo. En efecto, y lamentablemente, no son raros los casos en que los trabajadores, amparados por la ventaja de la gratuidad del acceso a los estrados de ese fuero, al estar exentos de abonar tasas judiciales, y frecuentemente mal aconsejados por abogados inescrupulosos y temerarios, promueven demandas por montos siderales, maniobra que a veces adquiere un carácter casi extorsivo, que busca forzar a la contraria a transar el pleito a pesar de la sinrazón para promover el reclamo. En efecto, la parte demandada, la empleadora, es consciente de que aun ganado el juicio habrá de verse obligada a afrontar el pago de honorarios de abogados y peritos, a pesar de que la contraparte hubiera resultado condenada al pago de las costas. Y si bien podría, en caso de pagar esos emolumentos, repetir del trabajador condenado en costas, ello es simplemente ilusorio, dada su probable insolvencia, con lo que, ganar el pleito es sinónimo de perderlo. Un triunfo jurídico se transforma en una derrota económica. Este es uno de los aspectos perversos del sistema cuya modificación urge concretar.

Ya volveremos sobre este tema, al analizar el contenido del proyecto. Sigo ahora destacando sus aspectos generales.

Se establece un tope del 25% (veinticinco por ciento) del monto del proceso en la responsabilidad por el pago de las costas, límite que habrá de regir para los asuntos que superen la suma de

\$ 2.000.000 (dos millones de pesos), con la salvedad de los juicios laborales, en los que no existe este tope. Ello por cuanto será altamente improbable que un juicio laboral alcance esa suma.

Se parte de la premisa de considerar que la relación contractual entre el profesional y su cliente es una materia propia de la legislación de fondo, por lo cual esta cuestión está contenida en el inciso 11 del artículo 67 de la Constitución Nacional, y se trata de una atribución del Congreso Federal, dejando a salvo, por cierto, su aplicación a los tribunales nacionales o locales, según corresponda por las normas de la competencia judicial.

No se me escapa que esta es una cuestión dudosa, que ha sido materia de largas discusiones entre los integrantes de las comisiones que han estudiado el proyecto. Por mi parte, creo que nadie habrá de poner en duda el celo que siempre he puesto de manifiesto en mis intervenciones como legislador, cuando se trata de la defensa de las atribuciones provinciales, como expresión del auténtico federalismo que nuestra Constitución declara y consagra.

He debido meditar mucho este aspecto del proyecto, que es particularmente delicado y conflictivo. Debemos partir de una realidad insoslayable. Todas las jurisdicciones provinciales poseen normas arancelarias para profesionales, aplicables en sus respectivos ámbitos territoriales. Las provincias, además, ejercen el poder de policía en esta materia y en todas existen colegios o asociaciones profesionales que tienen facultades disciplinarias sobre sus miembros.

Sin embargo, entiendo que la materia es propia de la legislación de fondo, el Derecho Civil en este caso. Porque si analizamos la cuestión, vemos que en definitiva la relación que se crea entre un profesional y su cliente habrá de tener elementos que la asemejen a un mandato, una locación de obra o de servicios o, si se quiere, un contrato atípico o "innominado" como los llama el Código Civil. Pero, sea cual fuere la figura contractual que se considera adecuada, no hay duda de que está regulada por el Derecho Civil. Entonces, la facultad del artículo 67, inciso 11) de la Constitución surge sin ninguna duda.

Quisiera aquí recordar un artículo que publicara el doctor Jorge E. Bustamante en el diario "La Nación" del 1º de diciembre de 1991 a raíz del dictado del decreto de desregulación de honorarios, número 2284/91. Al finalizar su artículo, que se titulaba "Desregulación de las

profesiones liberales", Bustamante decía: "...sería conveniente declarar formalmente que las leyes de aranceles de honorarios son violatorias de la Constitución Nacional en cuanto implican una alteración local de las normas establecidas en el Código Civil, cuya sanción corresponde al Congreso de la Nación (artículo 67, inciso 11 de la Constitución)."

Podrá o no compartirse la tesis de Bustamante. Pero debo confesar que estimo, por mi parte, que los argumentos que trae para fundamentar la competencia del Congreso de la Nación son serios. No se trata entonces acá de otra cosa que de cumplir con las normas de nuestra ley fundamental, a la que juramos respetar cuando asumimos nuestro cargos de legisladores.

Quiero agregar otras consideraciones sobre el polémico tema de las facultades locales en la determinación del precio de los servicios.

Además de lo que ya dijimos antes, quiero recordar que continúa vigente, en materia de concursos, lo establecido en el artículo 294 de la ley 19.551, que dispone que para el cálculo de las remuneraciones contempladas en los procesos concursales no resultan aplicables las disposiciones locales.

Esta facultad asumida por el legislador nacional tiene su base constitucional en el artículo 67, inciso 11 de nuestra ley fundamental, que delega en el Congreso Federal la atribución de dictar los Códigos Civil y Comercial, entre otros, así como también la ley de bancarrotas.

Vemos así que al no haberse cuestionado la calidad de nacionales de tales disposiciones se crea una situación similar a la que hoy se proyecta. No creemos que los supuestos que contemplamos se traten de facultades privativas de las provincias sino que constituyen una cuestión atinente a la legislación de fondo como lo es la locación de servicios en materia civil. En ejercicio de tal facultad y dentro de dicho campo, puede el Congreso de la Nación poner coto a las regulaciones previstas en los respectivos aranceles locales cuando su aplicación condujera a una desproporción entre las tareas y su retribución.

Quisiera ahora referirme a otro tema importante en el cual hemos introducido un criterio diferente al del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional.

Al modificar varias disposiciones de la ley arancelaria para abogados y procuradores se ha preferido mantener ciertos montos mínimos para las regulaciones pero haciendo la salvedad del eventual pacto en contrario al que pudieren

arribar las partes interesadas de forma de con-  
jugar así los principios de la dignidad profesional  
y de la libertad contractual.

Se ha aceptado y consagrado en el proyecto un  
criterio jurisprudencial sustentado por los tribu-  
nales federales de la Capital en lo que se refiere  
a la determinación del monto del proceso a los  
efectos regulatorios, en el caso de que no hu-  
biera sobrevenido sentencia ni transacción, pero  
fijando un tope equivalente a la mitad de la suma  
que se hubiere reclamado en la demanda o re-  
convención.

El importe de las multas que resulten aplica-  
bles y se recauden en virtud de las disposiciones  
contenidas en las normas arancelarias para abo-  
gados y procuradores se considera en el proyecto  
recursos específicos del Poder Judicial, adop-  
tando de esta manera una solución coherente  
con lo preceptuado en la ley de autarquía judi-  
cial.

Uno de los aspectos principales del proyecto  
aparece consagrado en su artículo 13. Quizás se  
podría afirmar, exagerando un poco, que en este  
artículo está condensada toda la ley, ya que el  
objetivo primario de abaratamiento queda resu-  
mido en esa norma. Por ella se obliga a los jueces  
a regular honorarios aun por debajo de los res-  
pectivos aranceles cuando la aplicación estricta  
de ellos ocasionare, a juicio fundado del magis-  
trado o Tribunal, una desproporción evidente e  
injustificada entre la importancia de la labor  
efectivamente realizada y la suma que en virtud  
de aquellas disposiciones arancelarias correspon-  
dería regular.

Se invita a las provincias a adherir a las normas  
de la ley, en lo que fuera pertinente, a fin de lo-  
grar la uniformidad de los principios y objetivos  
que se consagran en aquélla.

Como ya lo he adelantado, el proyecto obe-  
dece a una iniciativa del Poder Ejecutivo. El dic-  
tamen de la mayoría ha sido elaborado luego de  
haber analizado y sopesado las inquietudes y  
opiniones de diversos sectores. Así, a lo largo de  
las deliberaciones que precedieron al despacho  
de las comisiones, se concretaron varias reu-  
niones con funcionarios del Ministerio de Eco-  
nomía y Obras y Servicios Públicos, magistrados  
judiciales y representantes de asociaciones pro-  
fesionales de abogados y de contadores públicos.

Puede decirse que el proyecto intenta al-  
canzar un justo equilibrio entre los objetivos que  
inspiraron su remisión al Congreso —los que  
han sido puestos de manifiesto en el mensaje de  
elevación—, las inquietudes y observaciones de  
los sectores interesados consultados y la preser-

vación de la libertad contractual como valor jurí-  
dico. Confiamos en haber logrado la conjugación  
de esos valores.

Creo que ya podemos entrar en el análisis por-  
menorizado del proyecto. Debemos señalar,  
antes que nada, que la comparación entre el pro-  
yecto originario, contenido en el mensaje 2.074  
del Poder Ejecutivo (expediente P.E. 360/93), y  
el despacho de las comisiones nos demuestra  
que, si bien se ha mantenido en lo posible la es-  
tructura del primero, se efectuaron muchas mo-  
dificaciones, intentando mejorarlo. Baste señalar  
que el proyecto del Ejecutivo tenía 30 artículos,  
incluido el de forma, mientras que lo aprobado  
en la comisión sólo tiene 17.

Se modifican los artículos 505, 521 y 1.627 del  
Código Civil. En la primera de esas normas se  
establece que si el incumplimiento de la obliga-  
ción, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio  
judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago  
de las costas no excederá del 25 por ciento del  
monto del proceso.

Esa limitación porcentual habrá de regir en  
asuntos cuyo monto, legalmente determinado,  
excediere la suma de dos millones de pesos a  
partir de la cantidad que sobrepasare este límite.  
Es decir que el tope porcentual no rige para pro-  
cesos de hasta dos millones de pesos, pero si sus  
montos excedieren esta suma, y exclusivamente  
en la cantidad que sobrepasare esos dos millones  
de pesos, aquí sí entrará a jugar el porcentual  
máximo del 25 por ciento. Entonces, supo-  
niendo un juicio de cuatro millones de pesos,  
por los primeros dos millones no se aplicará  
tope, el que sí regirá para los segundos dos mi-  
llones.

Quiero aquí señalar que, en este punto, se  
han efectuado dos modificaciones al proyecto del  
Poder Ejecutivo. En primer lugar, se ha agre-  
gado la expresión "cualquiera sea su fuente" al  
aludir, a la obligación de cuyo incumplimiento  
se trate, de manera de no dejar ninguna duda en  
el sentido de que la normativa alcanza a las obli-  
gaciones contractuales, extracontractuales y le-  
gales.

En segundo término, se ha establecido que el  
tope solamente regirá para procesos que su-  
peren los dos millones de pesos en su monto le-  
galmente determinado, ya que la limitación sólo  
aparece justificada cuando se hallan en juego in-  
tereses económicos de relevancia por la cuantía  
del asunto. Es decir, si se tratare de juicios de  
significativa importancia económica; pero en  
modo alguno debe comprender a los de menor  
cuantía.

El límite de los dos millones de pesos puede aparecer como caprichoso o arbitrario. Pero justamente aquí es donde juega la discrecionalidad del legislador. Nos ha parecido razonable esta suma y así se ha acordado en las comisiones. En cambio, el proyecto del Poder Ejecutivo no contenía limitación alguna en lo referido al monto de los procesos alcanzados por la normativa, lo que puede tornar antieconómico el pequeño pleito para el profesional, con el consecuente riesgo de que el litigante se encontrará con dificultades para que atiendan su asunto con debido celo.

Mediante la modificación del artículo 521, se determina que el tope porcentual no habrá de regir en el supuesto de incumplimiento malicioso de la obligación, por cuanto la conducta del deudor no justifica que la ley lo favorezca con el abaratamiento que persigue el proyecto, sino que en este caso su dolo lo hará merecedor de un ejemplar castigo pecuniario.

La última de las normas del Código Civil que se modifica es el artículo 1.627, incorporándose un párrafo que establece que las partes del contrato de locación de servicios podrán ajustar libremente el precio de las tareas sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales.

Por otra parte, se hace imperativo para el juez reducir, en su caso, equitativamente, el precio aún por debajo del valor que resultare de la aplicación de los mínimos arancelarios locales si su aplicación condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución y la importancia de la labor cumplida.

Se debe destacar en primer lugar con relación a esta norma, que se ha preferido ampliar el ámbito de aplicación de ella, en comparación con el proyecto del Poder Ejecutivo, por cuanto este último la circunscribía a las labores cumplidas en un proceso. Pero la norma se refiere a la locación de servicios en general. Es decir, no se limita a tareas judiciales, sino que se hace extensiva su aplicabilidad a toda clase de tareas si la relación jurídica se califica como de locación de servicios.

Quiero destacar además que en el despacho de la mayoría de las comisiones hemos receptado una inquietud de los miembros de la Magistratura. Conforme a ella, la reducción que debe practicar el juez —artículo 3º del proyecto modificatorio del artículo 1.627 del Código Civil—, se establece solamente cuando la desproporción sea evidente e injustificada. O sea que se mantiene la terminología que adopta el Código Civil cuando regula el instituto de la lesión en el artículo 954.

A continuación, el proyecto entra en la materia de los concursos, facultad que, como hemos visto, es exclusiva del Congreso de la Nación a tenor de lo expresado por el inciso 11 del artículo 67 de la Constitución Nacional, delegando la facultad de dictar leyes sobre bancarrotas.

En cuanto a la sindicatura, se ha optado por mantener el criterio del proyecto del Poder Ejecutivo, en cuanto dichas tareas habrán de poder ser ejercidas, no solamente por contadores públicos, como es hasta ahora, sino que se prevé que esas funciones sean desempeñadas también por abogados.

Indudablemente, si en el concurso de que se trate a juicio del tribunal interviniente, las cuestiones a resolver por la sindicatura, son preponderantemente de tipo jurídico más que contable no se observan inconvenientes en que la labor recaiga en un letrado, profesional del derecho, como en su momento se previó para los concursos civiles.

Pero aquí se ha efectuado una modificación con relación al proyecto del Ejecutivo, el que requiere que los síndicos tengan una antigüedad de diez años en la profesión. Se ha preferido mantener ese lapso en cinco años, por cuanto de aceptarse aquel criterio, resultaría que son más rigurosos los requisitos para desempeñar una sindicatura que para ser ministro de la Corte Suprema, cargo máximo del Poder Judicial, para el que son suficientes ocho años de ejercicio de la abogacía. De esta forma, se evita caer en una marcada incongruencia, y se han receptado las observaciones que en este punto nos han formulado los magistrados del fuero comercial que nos honraron con su visita a esta Casa.

Se modifica el artículo 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, determinando que, en materia de prueba pericial, si el experto reclamare el pago de sus honorarios a la parte no condenada en costas entonces su pretensión y derecho quedarán automáticamente reducidos a la mitad. Ello intenta remediar la situación derivada del derecho que tienen los peritos de cobrar sus emolumentos de cualquiera de las partes, aun a la que no hubiere sido condenada en costas. Obviamente, siempre el perito, en tal caso, conservará un crédito por la mitad no percibida, y se reparte equitativamente el riesgo por la eventual insolvencia de la parte vencida en el pleito y condenada en costas, de manera de no hacer recaer la totalidad de la carga en quien ha demostrado su razón para pleitear.

En este punto, se ha preferido modificar el criterio del proyecto oficial, que sólo acordaba

esta equitativa solución para el supuesto de haberse concedido el beneficio de litigar sin gastos.

Se modifica también el artículo 478 del Código Procesal, estableciendo que las remuneraciones de los peritos deberán resultar adecuadas proporcionalmente a las de los restantes profesionales, recogiendo así un criterio consagrado en la jurisprudencia de todos los fueros.

Mediante el artículo 11 del proyecto se hacen extensivas las modificaciones introducidas antes —esto es los artículos 9º y 10 del proyecto— al régimen procesal civil y comercial, al ámbito especial del procedimiento laboral, previsión de indudable criterio equitativo, para evitar los abusos a que antes hiciera referencia. Por otra parte, al declarar aplicable al procedimiento laboral la disposición del artículo 478 del Código Procesal Civil y Comercial, se permite a las partes impugnar la procedencia de la pericia ofrecida por su contraria, y de esa manera, si quedare acreditada la innecesariedad de esa medida probatoria, o que ella no ha sido un elemento de convicción coadyuvante para la solución del diferendo, las costas de la pericia impugnada pesarán exclusivamente en el patrimonio de quien propusiera la medida probatoria improcedente o superflua.

**Sr. de la Rúa.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Aguirre Lanari.** — Disculpe, señor senador, pero se trata de un informe cuya lectura no quisiera interrumpir a fin de no romper la armonía del mismo.

**Sr. de la Rúa.** — Sí, pero usted sostiene que no se puede reclamar nada a la parte no condenada en costas. Sin embargo, el artículo 9º dice otra cosa; se le puede reclamar sólo hasta el 50 por ciento ...

**Sr. Aguirre Lanari.** — Justamente, esa es la innovación de que se trata. Esto nos ha sido sugerido por magistrados.

Entramos ahora a considerar las modificaciones que contiene el proyecto en relación a las normas arancelarias que rigen la actividad de abogados y procuradores, las que se encuentran previstas en la ley 21.839.

Al modificarse el artículo 2º del régimen de honorarios se ha preferido efectuar una pequeña modificación con respecto al proyecto del Poder Ejecutivo, el que alude a la condena en costas a la "contraparte", manteniendo el criterio todavía vigente. En lugar de ello se ha optado por aludir a que la condena en costas estuviere a cargo de "otra de las partes intervinientes en el proceso",

que podrá ser no necesariamente la contraria, a poco que reparemos en la posibilidad de un proceso judicial con partes múltiples o un litisconsorcio. Si cualquiera de las otras partes, aun cuando no se trate de la contraria, fuere condenada en costas, el profesional que actuare para su cliente con retribución fija o periódica, o en relación de dependencia, podrá dirigir su pretensión de cobro contra la parte efectivamente condenada y obligada, independientemente de su posición procesal. Este criterio, que juzgamos equitativo, se reitera en otras normas del régimen arancelario de abogados.

Tal como se prevé en el proyecto oficial del Poder Ejecutivo se mantiene la derogación del artículo 5º de la ley 21.839, norma desprovista de toda razonabilidad. En efecto, ese artículo, por un lado declara la nulidad de la renuncia anticipada de honorarios o pacto por monto inferior a la escala legal, y a renglón seguido, establece una severísima sanción para el profesional que, a pesar de esa renuncia anticipada o pacto por debajo del arancel, reclamare el pago de honorarios o pretendiese emolumentos superiores a los acordados, según el caso. La norma, como se ve, es un verdadero despropósito, y debe ser eliminada.

Ello resulta coherente con el espíritu del cual se imbuje y en el cual se inspira el proyecto, que consiste en respetar la libertad contractual. Este liminar principio del derecho, que fuera introducido por el Derecho Romano y condensado con la expresión latina *pacta sunt servanda*, se encuentra reconocido por el artículo 1.197 de nuestro Código Civil, al establecerse que los convenios contractuales constituyen para las partes una regla a la cual deben someterse como si se tratara de la ley misma. Libertad contractual que, según tiene dicho la Corte, es una manifestación del derecho de propiedad, amparados por los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.

Por lo demás, al derogarse en el proyecto la prohibición de renunciaciones anticipadas o pactos por montos inferiores al arancel, queda eliminado el carácter de orden público que las escalas revisten en la actualidad, ventaja que no tiene justificación. Como se verá, por otra parte, se mantienen ciertos montos mínimos para las regulaciones, pero a partir del proyecto, si es aprobado, esos montos mínimos constituirán pautas supletorias para el juez, el que habrá de respetar en primer término lo que las partes libremente pudieran acordar. Nada tiene que hacer aquí el orden público, entendido como aquellos principios esenciales que rigen a la comunidad y que,

por definición, son inderogables por voluntad de los interesados. Al suprimir el orden público no por ello se deja de reconocer la dignidad de los profesionales. El propio término "honorarios", etimológicamente nos da la idea de que se trata de una remuneración de "honor". Precisamente por ello, ese honor y esa dignidad profesional reclama preservar la libertad contractual, sin que el legislador pueda inmiscuirse en esa esfera de la soberanía de la voluntad individual. Los abusos, de existir, siempre podrán remediarse por vías legales, toda vez que, a la par del principio *pacta sunt servanda*, continúan vigentes otras instituciones que lo morigeran o atenúan como lo son, por ejemplo, el abuso del derecho, la lesión, la imprevisión, consagradas en el Código Civil.

Los mínimos que garantiza la ley, sin perjuicio de que las partes puedan libremente apartarse de ellos, se han fijado en valores que se juzgan equitativos. En esto el proyecto se diferencia del criterio del Poder Ejecutivo, en el cual se derogaban lisa y llanamente todos los mínimos legales. A simple título de ejemplo, se han establecido los siguientes montos: quinientos pesos para los procesos de conocimiento, trescientos pesos para los de ejecución, doscientos pesos para los procesos voluntarios, quinientos pesos en los procesos correccionales, y mil pesos en las demás causas penales. Estimo equitativos estos montos mínimos, que al día de hoy están desactualizados en la ley vigente.

A diferencia del proyecto oficial, se ha mantenido el derecho que tiene el abogado, cuando actuare además como procurador, a fin de que le sean regulados sus honorarios en el doble carácter, esto es, como patrocinante y apoderado, si ejerce ambas tareas simultáneamente. Se considera enteramente justo y razonable reconocer ese premio al profesional que asume ambas responsabilidades, es decir, no sólo la dirección letrada del proceso sino también las funciones de representación o mandato, con las consiguientes obligaciones. Es obvio que a mayor responsabilidad debe existir mayor remuneración. En cambio, se ha preferido respetar el temperamento del proyecto del Ejecutivo, fijando la retribución del procurador en una escala que va del treinta por ciento al cuarenta por ciento de los honorarios que correspondan al abogado.

Si el honorario debiere regularse sin que se hubiere dictado sentencia o sobrevenido transacción se ha fijado una pauta regulatoria que recoge un criterio de las cámaras de apelaciones del fuero federal de la Capital, determinándose que en tal caso se considerará monto del proceso

la suma que razonablemente a criterio y resolución fundada del Tribunal, hubiere resultado en caso de haber prosperado el reclamo del pretensor. De esa forma se evitan los abusos, lamentablemente muy frecuentes, derivados de demandas por montos excesivos, evidentemente abultados, los que muchas veces son utilizados con propósitos extorsivos para forzar una transacción.

No puede delegarse en una parte interesada, como es el actor o reconveniente, la facultad de fijar el monto del proceso, sobre todo si se piensa que el propio profesional es quien en definitiva fijará esa cantidad, sometida a su arbitrio. Los casos de pluspetición, a pesar de las previsiones procesales, no siempre encuentran condigno castigo por parte de los magistrados. Esta norma contribuirá a sanear moralmente los procesos judiciales.

Con relación a los incidentes se amplía la escala regulatoria, que actualmente oscila entre el diez por ciento y el veinte por ciento de lo que corresponda al proceso principal, reduciéndose en el proyecto el tope mínimo y llevándolo al dos por ciento. Ello obedece a que en muchos casos los incidentes son sencillos, de escasa relevancia, por lo que mantener el mínimo en el diez por ciento parece exagerado. Además, la norma tiende a evitar las intervenciones procesales, abaratando el costo de incidencias meramente obstructivas, muchas veces desconectadas del fin principal de todo proceso judicial, el que consiste en brindar al juzgador los elementos necesarios para arribar a la verdad jurídica objetiva.

En lo referente al destino de las multas previstas en las normas arancelarias para abogados y procuradores, se ha preferido guardar coherencia con el régimen consagrado en la ley de autarquía del Poder Judicial, que lleva el número 23.853, determinando que esos recursos constituirán fondos específicos del Poder Judicial de la Nación, a diferencia del criterio puesto de manifiesto en el proyecto oficial, en el que se había optado por la creación de una cuenta especial por parte del Poder Ejecutivo.

Con relación a las deudas por honorarios se ha hecho una distinción, según se trate del período anterior o posterior a la vigencia del régimen de convertibilidad consagrado por la ley 23.928. Así, las deudas nacidas antes de su entrada en vigencia y que estuvieren en mora se actualizarán por el índice de precios al por mayor, devengando una tasa de interés del seis por ciento anual. Pero a partir de ese momento, las deudas



sólo generarán intereses, los que serán equivalentes a la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina. Ello recoge explícitamente el criterio que en la materia ha sustentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Yacimientos Petrolíferos Fiscales contra la provincia de Corrientes". Y que fuera reiterado en un reciente fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, en autos "Vázquez c/Bilbao".

Como vemos, aquí también el despacho se aparta de la propuesta en el proyecto del Poder Ejecutivo en dos aspectos. Primero, en cuanto allí no se discrimina en lo referente al momento en que hubiere nacido el crédito por honorarios. En efecto, si éste es anterior a la Ley de Convertibilidad, si no se actualizara el capital —como lo propone nuestro proyecto— el derecho del profesional acreedor habría sufrido una merma en ese capital, como ocurre en todo proceso inflacionario descontrolado. Por eso, ponemos en primer lugar la actualización del capital de acuerdo con el índice de precios al por mayor, nivel general, publicado por el INDEC. Y además, restablecido el monto del capital de esta manera, se le agrega el cobro de un interés del 6 por ciento anual por la mora en el cumplimiento.

Para el segundo supuesto, esto es, a partir de la vigencia de la Ley de Convertibilidad, se prescribe un interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina, conforme a lo establecido por la jurisprudencia.

En cambio, en el proyecto del Poder Ejecutivo no sólo no se discrimina entre deudas anteriores y posteriores a la Ley de Convertibilidad sino que además se deja librada al juez la fijación de la tasa de interés, con la incertidumbre que esta pauta discrecional podría traer con disímiles criterios interpretativos.

Llegamos así a la norma medular del proyecto, que está contenida en el artículo 13. Por la misma, los jueces deberán —esto es imperativo— regular los honorarios de los profesionales, peritos síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la Justicia, por labores desarrolladas en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos o porcentuales mínimos previstos en los regímenes arancelarios aplicables a su actividad, si por las circunstancias que rodearan a la tarea realizada, o el valor de los bienes en juego, la aplicación estricta de esos aranceles ocasionare una evidente e injustificada desproporción entre la real importancia del trabajo y la retribución que legalmente habría de corresponder.

Lógicamente, en tales casos, que habrán de ser excepcionales, el Tribunal deberá resolver con debido fundamento, bajo sanción de nulidad.

Esta es la norma madre del proyecto. Acá se resume prácticamente todo su contenido, su espíritu y la necesidad de su consagración por vía legislativa. A diferencia del proyecto del Poder Ejecutivo, que había optado por derogar o modificar específicamente normas contenidas en cada uno de los regímenes arancelarios, se entendió razonable condensar todo ello en una sola norma de amplio contenido, de manera que ninguna profesión o actividad quedara fuera de la previsión regulatoria.

Mediante el artículo 14 del proyecto se consagra, con similar amplitud, la libertad contractual, dejando sin efecto el carácter de orden público de los aranceles, al facultar su libre fijación por acuerdo de partes, las que no se verán compelidas a ajustarse a las escalas vigentes.

Se establece que estas dos últimas normas tienen el carácter de legislación complementaria del Código Civil, la que en consecuencia, regirá en todo el país.

Se invita a las provincias a adherir al régimen del proyecto, en lo que fuera pertinente.

Señor presidente, señores legisladores: hoy estamos debatiendo un proyecto de fundamental importancia para la sociedad en su conjunto, no solamente para los sectores directamente involucrados.

Quiero destacar que las comisiones encargadas del estudio del proyecto han trabajado con verdadero ahínco y preocupación, conscientes de la gravedad y trascendencia de lo que está en juego.

Probablemente el proyecto sea perfectible. Puede contener errores. Pero estoy convencido de que se ha elaborado lo que se entendía como más razonable y equitativo para la sociedad, sin descuidar legítimos derechos individuales.

Hemos tenido innumerables reuniones con representantes de los sectores que, convocados a esta casa, o en forma espontánea, se acercaron para debatir y traer razones en apoyo de sus respectivos puntos de vista. Esos encuentros han sido particularmente enriquecedores y fructíferos para los legisladores que asistimos a ellos.

Vaya mi especial reconocimiento a todos cuantos aportaron su experiencia en tan delicado y difícil problema, como es el de conjugar valores muchas veces encontrados, como la libertad, la seguridad, la dignidad profesional y la justicia.

Entendemos haber elaborado un dictamen razonable, teniendo como horizonte la exigencia constitucional que emana del artículo 28 de nuestra Ley Fundamental.

Por estas consideraciones, solicito a mis pares la aprobación del proyecto de ley en consideración.

**Sr. Genoud.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Storani).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** — Señor presidente: en nombre del bloque radical solicito como moción de orden que se levante la sesión. Y lo voy a fundar con pocas palabras. Estamos tratando un tema de significativa importancia puesto que se procura modificar un régimen legal que ya tiene casi cien años de vigencia ininterrumpida en el país. No obstante, el debate se está llevando a cabo en medio de una marcada indiferencia por parte de los señores senadores. De tal manera que recogiendo la sugerencia de los miembros informantes de nuestro bloque, los señores senadores Cendoya y de la Rúa, solicito —reitero— el levantamiento de la sesión a fin de que este debate continúe en un marco de mayor presencia e inquietud de los señores senadores para que al momento de votar estén todos compenetrados de los argumentos dados en favor y en contra del proyecto.

**Sr. Presidente (Storani).** — Corresponde dar la palabra al señor senador Cendoya, que está anotado como miembro informante de la minoría...

**Sr. Genoud.** — La mía es una moción de orden.

**Sr. Presidente (Storani).** — ... pero en tanto y en cuanto se ha hecho una moción de orden, corresponde ponerla a votación.

**Sra. Rivas.** — No hay quórum.

**Sr. Presidente (Storani).** — Se va a llamar para votar.

—Así se hace.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Aguirre Lanari.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: encuentro atinada la moción formulada, porque en esa forma quienes no comparten los términos del proyecto tendrán que estudiar y destruir los argumentos que he dado en el día de hoy o adherirse a los mismos. Es más probable que se cumpla la primera circunstancia, pero creo que hay que dar tiempo a los integrantes del cuerpo para que se informen debidamente. Y además porque es evidente que no hay ánimo en continuar esta sesión.

**Sr. Presidente (Menem).** — No comparto los fundamentos del señor senador porque creo que hubo tiempo suficiente para hacerlo. Pero de todos modos la Presidencia informa que han sido infructuosas las gestiones para conseguir quórum. Como ha pasado un tiempo más prudencial, no obstante que hay treinta y tres señores senadores en la casa queda levantada la sesión.

—Son las 20 y 57.

MARIO A. BALLESTER.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.